

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramírez.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 4 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido por los CC. Enrique Rubio, Matías F. Soberón y Francisco Grande, ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, contra los actos del ciudadano administrador de Rentas de esa ciudad, que les cobra el cuatro por ciento de derechos al Estado y municipales, por introducción de trescientos treinta y un tercios de mantas.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que los Sres. D. Enrique M. Rubio, Matías F. Soberón y Francisco Grande, solicitan amparo de la justicia federal, por el hecho de que al introducir el primero doscientos veintitres tercios de mantas, procedentes de la Fábrica del Hércules del Estado de Querétaro, el segundo setenta y dos tercios del mismo género de la Fábrica del Rosario del Estado de Coahuila, y el tercero treinta y seis tercios también de mantas de la Fábrica de la Aurora, situada en el Saltillo, la administración principal de rentas les exige, so-

bre todos esos efectos, el cuatro por ciento para el Estado, conforme los arts. 8º del decreto núm. 64 y 12 del núm. 75, y el municipal con arreglo á la frac. 2ª del art. 2º de la ley núm. 28. Los mismos interesados, conceptuando injusto aquel cobro, creen que al exigírseles, se invade por las autoridades del Estado, la esfera de la autoridad federal, en virtud de que por el art. 72 frac. 9ª de la Constitución general de la República, solo el Congreso de la Unión tiene entre otras facultades, la de impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado, se establezcan restricciones onerosas, y que por el hecho de hacer efectivo el cobro de aquellos impuestos, se infringe la ley reglamentaria de 2 de Mayo de 1868, que terminantemente dispone, que ningún Estado puede imponer bajo ninguna denominación, á los frutos de otros Estados, mayores contribuciones que las que exige á sus propios frutos.

Pedido al ciudadano administrador principal de Rentas del Estado, el informe que previene el art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, se refiere en su comunicación de fojas 24 á lo mismo que expresó en caso semejante, en que dos interesados solicitaron amparo por igual causa, cuya superior resolución aun no se sabe.

Segun lo ameritado, los peticionarios solo se contraen, á que disponiéndose por el decreto núm. 35 de la actual II. Legislatura, que la Fábrica de hilados y tejidos del Venado, está exceptuada por cinco años, del pago de los impuestos á que se refieren los decretos núms. 28, 64 y 75 expedidos por la misma cámara, deben gozar de las mismas exenciones los demás frutos industriales de las fábricas de que proceden las mantas que han introducido para su consumo, supuestas las franquicias que otorga el supremo decreto de 2 de Mayo de 1868.

El ministerio ya tiene manifestado en otra vez, que grandes motivos de emulación é impulso, en favor de la industria del Estado, movieron á la II. Cámara del mis-

mo á expedir su decreto núm. 35, fecha 23 de Diciembre de 1873, que entre otros objetos envolvía la noble consideracion de dar vida á la ciudad del Venado, que sumergida en la mas deplorable decadencia y situacion precaria en que yacia, procuró solo engrandecerla, permitiéndole que la fábrica de mantas, que muchos años atrás habia quedado paralizada en su obra material, por falta de recursos, se pusiese por el nuevo propietario en el estado de movimiento y ejercicio que él ofrecía, estimulado por los mismos vecinos de aquella ciudad, á fin de obtener el benéfico resultado de elaborar los hilados y tejidos, para el consumo en el mismo Estado. A tales causas y no á otras, fué debida la expedicion de aquel decreto, porque empresa de tal naturaleza no podia menos, siendo la única, que protegerse y auxiliarse, cuando el fin á que se dirigía no era otro que plantear en el Estado una fábrica de aquella importancia, á pesar de la carencia de recursos para conseguirlo. Así es que, en el deber de la legislatura y en sus amplias facultades, estuvo dispensar aquella concesion, para hacerla de la mejor condicion posible, que pudiera competir con las de los otros Estados que ya establecidas con mas anterioridad y con abundantes recursos, pudiera, por sí misma proporcionarse su mejoramiento, y crear el estímulo, que la hiciera llegar al fin propuesto. El auxilio y proteccion impartidos con aquel objeto lo constituyó solo la concesion dicha, que la exceptuaba del pago de los impuestos á que la misma se refiere, y por cierto que ella no cerraba, como no cierra, las puertas á los productos de las fábricas de otros Estados, ni constituye el monopolio, para que si és que los peticionarios han podido introducir el número de piezas de mantas que mencionan y por ello se les exige el pago de los impuestos que señalan las leyes de hacienda del Estado, no hay injusticia en tal cobro, ni ese monopolio que se indica, supuesto que no se les priva de cuantas ventas puedan y quieran

hacer, sino que tienen el tráfico libre y expedito, que no estorban en manera alguna aquellas disposiciones, tanto respecto de las mantas fabricadas dentro del Estado, como de las que se importen de fuera, y en consecuencia no hay tampoco la restriccion honerosa á que se alude, ni se ataca derecho alguno, pues que la legislatura no ha hecho mas que poner en ejercicio una obligacion que todo gobierno tiene para impartir su proteccion en favor de la industria de los pueblos que le están encomendados, y por eso es que no ha carecido de atribuciones para reglamentar su comercio interior, facultades que el mismo pacto federal le concede por las fracs. 9ª y 10ª del art. 92 y 112 frac. 1ª; por manera, que atento el espíritu de estas disposiciones, ni hay ni puede decirse propiamente que existen tales restricciones, ni que por aquella reglamentacion se hayan atacado facultades ajenas, extralimitando las propias y peculiares que le incumben.

En tal virtud, el mismo ministerio es de opinion, que por las consideraciones espuestas y demas que no se ocultarán á la ilustracion de este juzgado, se deniegue el amparo solicitado por los Sres. Enrique M. Rubio, Matías Hernandez Soberón y Francisco Grande.

Tal es mi parecer, que someto como siempre al mas ilustrado de vd.

San Luis Potosí, Setiembre 7 de 1874.
Gregorio Vazquez.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Setiembre 14 de 1874.
—Visto este juicio de amparo promovido por los Sres. D. Enrique M. Rubio, D. Matías H. Soberón y D. Francisco Grande, contra los actos del ciudadano administrador de Rentas de esta capital, que les cobra el cuatro por ciento de derechos para el Estado, conforme á los arts. 8º del decreto núm. 64 y 12 del núm. 75 de la II.

Legislatura del mismo, y el municipal con arreglo á la frac. 2ª del art. 2º de la ley núm. 28, por la introduccion á esta plaza de trescientos treinta y un tercios de manta, que procedentes de las fábricas del «Hércules» en el Estado de Querétaro, del «Rosario» en el Estado de Coahuila y de la «Aurora» en el mismo Estado, hicieron los quejosos; el oficio del ciudadano administrador de Rentas en que se remite al informe que en un caso idéntico rindió con anterioridad, y que por estar agregado á su expediente actualmente en revision ante el superior, no ha podido tenerse presente; la protesta formulada por los peticionarios por ante el escribano público C. Antonio Nieto, que contiene la prueba del hecho. El pedimento del ciudadano promotor fiscal y todo lo demas que se tuvo presente y ver convino:

Considerando: que conforme á la frac. 9ª del art. 72 de la Constitucion general de la República, corresponde como atribucion federal al Congreso de la Union, impedir por medio de bases generales, que en el comercio de Estado á Estado se establezcan restricciones honorosas: que la ley reglamentaria de este artículo espedita en 2 de Mayo de 1868, prohíbe terminantemente á cada Estado imponer bajo ninguna denominacion á los frutos de otros Estados, mayores contribuciones que las que exige á los suyos propios: que en el hecho de estar exceptuados de todo pago las mantas clavoradas en el Estado de San Luis Potosí, por el decreto núm. 35 de la II. Legislatura del mismo, debia hacerse igual concesion á las que en él se introdujeran procedentes de fábricas de otros Estados, pues de otra manera sería invadir la esfera de la autoridad federal, estableciendo restricciones honorosas en el comercio de Estado á Estado, y violar la ley de 2 Mayo ya citada, exigiendo á los frutos de otros Estados mayores contribuciones que á los suyos propios: Que siendo la Constitucion general y las leyes que de ella emanen la ley suprema del país, á ellas deben atenderse todas las

TOMO VII.—PARTE II.

autoridades, no obstante cualquiera disposicion en contrario que hubiere en las particulares de los Estados. Por tales consideraciones y con fundamento de los arts. 72 frac. 9ª, 101 y 126 de la Carta fundamental de la República, único de la ley de 2 de Mayo de 1868 y 1ª frac. 3ª de la ley de 20 de Enero de 1869, he debido declarar y declarar:

Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Enrique Mª Rubio, Matías H. Soberón y Francisco Grande, contra los actos del ciudadano administrador de Rentas de esta capital, que les cobra derechos municipales y del Estado por la introduccion á esta plaza de doscientos veintitres tercios de mantas, que hizo el primero, setenta y dos tercios el segundo y treinta y seis tercios el tercero.

Segundo: que se eleve este juicio original á la Suprema Corte de Justicia, para su revision, sacándose previamente las copias de estilo y remitiéndose la que corresponde al periódico oficial para su publicacion.

Así definitivamente fallando lo decreto y firmó el C. Lic. Genaro Raigosa, juez 3º. suplente de Distrito del Estado. Doy fé.—Lic. G. Raigosa—Donaciano Monroy, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 30 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido por los CC. Enrique Rubio, Matías F. Soberón y Francisco Grande, ante el juzgado de Distrito de San Luis Potosí, contra los actos del C. administrador de rentas de esa Ciudad, que les cobra el cuatro por ciento de derechos al Estado y municipales, por introduccion de 331 tercios de mantas, procedentes de las fábricas de Hércules, (Estado de Querétaro;) del Rosario, (Estado de Coahuila;) y de la Aurora, (en el mis-

mo Estado de Coahuila) conforme á las prevenciones de las leyes números 64, 75 y 28 de la legislatura de San Luis Potosí, con cuyo cobro, alegan los quejosos, se infrinje el art. 72 constitucional en su fraccion 9ª. Visto el oficio del C. administrador de rentas en que se reproduce por vía de informe en este juicio el que rindió en 3 de Julio próximo pasado, en el amparo semejante que promovieron los mismos interesados.

Visto el pedimento del C. promotor fiscal: los justificantes y alegato presentados por los quejosos; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y

Considerando: que es un hecho que la ley núm. 35, expedida por la legislatura del Estado de San Luis Potosí, establece una restriccion onerosa al comercio de mantas procedentes de otros Estados, por desnivelar sus precios con el privilegio que concede á la fábrica de «Gundalupe», eximiéndola por cinco años del pago de impuestos que tienen las mantas que se introducen de fuera. Que para hacer esta consecion en los términos indicados, no tiene la referida legislatura facultad alguna, puesto que por la fraccion 9ª del art. 72 constitucional, está prohibida. Que por el mismo hecho se contraría por el Estado la prevencion de la ley general de 2 de Mayo de 1868. Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 constitucionales y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juez de Distrito de San Luis Potosí en 14 de Setiembre último, que declaró: Que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Enrique M. Rubio, Matías F. Soberon y Francisco Grande, contra los actos del C. administrador de rentas de esta Capital, que les cobra derechos municipales y del Estado, por la introduccion á esa plaza de los referidos tercios de mantas.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado

de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. presidente y magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—CC. Presidente, José M. Iglesias.—M. M.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 14 de 1874.—Luis Mª Aguilar.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora, por Juana Moya contra el ciudadano Coronel del batallon núm. 15, por violacion de garantías.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito:

La ciudadana Juana Moya se queja de los procedimientos del C. coronel J. M. Rangel, al dar la orden de su deportacion al puerto de Mazatlan, fundándose que con esta providencia se le violan las garantías que le otorga la Constitucion general en su artículo 16; y en consecuencia, para reparar ese agravio, pide amparo y proteccion, quedando en completa libertad. No hay duda, ciudadano juez, que la deportacion ó embarque de una persona contra su voluntad á otro lugar fuera de su residencia, es verdaderamente una pena y la que solo puede aplicar la autoridad judicial, previos los requisitos de la ley; y por lo mismo, un jefe